

Pedro CILLERO SALOMÓN

Unidad de Investigación de Hacienda Pública y Economía del Sector Público.

Departamento de Economía Aplicada.

Universidad de Valencia.

Avda. Blasco Ibáñez, 32. 46010 VALENCIA.

Tel. (96) 3864525 / (96) 3864706

FAX: (96) 3864415

CRITERIOS DE IMPUTACIÓN DEL BENEFICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LOS PROGRAMAS DE GASTO RECOGIDOS EN LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.

INTRODUCCIÓN

La dimensión económica que han alcanzado los programas de gasto público en las economías occidentales y las discusiones frecuentes acerca de la deseable dimensión del sector público, nos indican la importancia que el análisis del gasto público supone para la valoración objetiva de la actividad económica del sector público mediante un examen exhaustivo de los diferentes programas de gasto que nos permita conseguir, mediante una revisión de sus objetivos, una mayor eficiencia en su diseño y un mejor control de su ejecución.

Para lograr estos objetivos últimos, con carácter previo, necesitamos elaborar una propuesta operativa de imputación de los beneficios derivados de los diferentes programas de gasto recogidos en la clasificación funcional de los Presupuestos Generales del Estado, basándonos en los criterios teóricos de imputación que pretenden identificar y ubicar a los beneficiarios últimos de un determinado bien o servicio público.

PROPUESTA OPERATIVA

La estructura funcional de los Presupuestos Generales del Estado está basada en un criterio de distribución de los créditos que tiene su base en un desarrollo programático. Debido a ello se toma el programa como un elemento de asignación vinculante del gasto. A través de esta fórmula de **presupuestación por programas** se consigue sustituir el *presupuesto de medios por el de fines*, es decir se pretende que el presupuesto se distribuya en función de las actuaciones a realizar a lo largo del ejercicio. Su diseño se realiza mediante un proceso que, en una primera fase, consiste en la fijación de las realizaciones que quieren llevarse a cabo, posteriormente tales realizaciones deben priorizarse y, por último, en función de las disponibilidades financieras de que se dispone, se diseñan los programas de gasto concretos para hacer frente a esas prioridades establecidas en función de los fines a alcanzar.

La clasificación funcional de los P.G.E. ordena los créditos presupuestarios, según la naturaleza de los servicios públicos que con ellos se proporcionan a los ciudadanos. En esta

clasificación, todos los programas de gastos aparecen agrupados en cuatro grandes grupos de función, a saber : actividades de carácter general, actividades sociales y para la comunidad, actividades económicas y una partida de gastos no clasificados.

Estas cuatro grandes agrupaciones, se desglosan posteriormente de la siguiente manera :

a / 9 grupos de función.

b / 31 funciones.

c / 81 subfunciones.

d / 219 programas.*

* El número de programas varía todos los años en función de agrupaciones, creación o eliminaciones de programas.

ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

GRUPOS DE FUNCIÓN

- 1. Servicios de carácter general.**
- 2. Defensa, protección civil y seguridad ciudadana.**
- 3. Seguridad, protección y promoción social.**
- 4. Producción de bienes públicos de carácter social.**
- 5. Producción de bienes públicos de carácter económico.**
- 6. Regulación económica de carácter general.**
- 7. Regulación económica de sectores productivos.**
- 9. Transferencias a otras Administraciones Públicas nacionales e internacionales.**
- 0. Deuda Pública**

FUNCIONES

- 1.1. Alta Dirección del Estado y del Gobierno
- 1.2. Administración general
- 1.3. Relaciones Exteriores
- 1.4. Justicia
- 1.5. Protección y seguridad nuclear
- 2.1. Defensa
- 2.2. Seguridad y protección civil
- 3.1. Seguridad y protección social
- 3.2. Promoción social
- 4.1. Sanidad
- 4.2. Educación

- 4.3. Vivienda y urbanismo
- 4.4. Bienestar comunitario
- 4.5. Cultura
- 4.6. Otros servicios comunitarios y sociales
- 5.1. Infraestructuras básicas y transporte
- 5.2. Comunicaciones
- 5.3. Infraestructuras agrarias
- 5.4. Investigación científica, técnica y aplicada
- 5.5. Información básica y estadística
- 6.1. Regulación económica
- 6.2. Regulación comercial
- 6.3. Regulación financiera
- 7.1. Agricultura, ganadería y pesca
- 7.2. Industria
- 7.3. Energía
- 7.4. Minería
- 7.5. Turismo
- 9.1. Transferencias a las Administraciones Públicas Territoriales
- 9.2. Transferencias a la Comunidad Europea
- 0.1. Deuda Pública

Una vez presentada la clasificación funcional por programas de gasto de los Presupuestos Generales del Estado, debemos pasar a continuación a analizar separadamente y con un mayor detenimiento los diferentes tipos de funciones, con el fin de proceder posteriormente a la imputación del beneficio de los distintos programas de gasto.

1. Actividades de carácter general.

Comprende dos funciones de primer orden o grupos de función, **Servicios de Carácter General** y **Defensa, Protección Civil y Seguridad Ciudadana**, que se subdividen a su vez en siete funciones.

Las funciones **1.1. Alta dirección del Estado** y **1.2. Administración General** recoge los gastos relativos a los órganos de gobierno, la administración financiera, la regulación económica general, los gastos del Estado relativos a otras Administraciones Públicas y otros gastos generales.

La función **1.3. Relaciones exteriores** engloba todos los desembolsos relacionados con las relaciones con gobiernos extranjeros e instituciones internacionales y los gastos de representación diplomática y consular y los relativos a la cooperación internacional.

La función **1.4. Justicia** comprende todos los gastos que se destinan al mantenimiento de la ley y el orden jurídico : tribunales de justicia, instituciones penitenciarias y demás gastos generales de la Administración de justicia.

La función **2.1. Defensa** agrupa todos los gastos relacionados con las Fuerzas Armadas, tanto de los efectivos profesionales, como de reemplazo.

La función **2.2. Seguridad y protección civil** recoge los gastos relacionados con el mantenimiento del orden público : protección civil, fuerzas de orden público, control de tráfico y gastos generales relacionados con este área.

CRITERIO DE IMPUTACIÓN

Desde el punto de vista de su naturaleza económica, estos dos grupos de función o funciones de primer orden, **Servicios de Carácter General y Defensa, Protección Civil y Seguridad Ciudadana**, deben ser consideradas como bienes públicos puros o casi puros, es decir, servicios no asignables a colectivos específicos de personas por satisfacer necesidades de carácter general que no pueden ser atendidas eficientemente por el mecanismo del mercado.

Además, su ámbito espacial es estatal, sus consumos intermedios y finales se realizan por todos los residentes en territorio español.

Son bienes y servicios que pueden tener, al mismo tiempo, carácter intermedio, no influyentes en las utilidades individuales, aunque constituyan factores de producción, y carácter final, incrementan directamente el bienestar económico de los individuos.

También parece claro que, aún cuando pueden ser sustituidos hasta cierto punto por bienes privados adquiribles en el mercado, existen límites claros a la sustitución privada de los servicios públicos que se incluyen en estas dos funciones.

Ambos problemas, el grado en que cada servicio es intermedio y final por un lado y, por otro lado, la parte que de este servicio final puede ser sustituido por bienes privados, se atenúan si tenemos en cuenta que todos estos bienes representan gastos no asignables a colectivos determinados de personas y que sus consumos finales presentan un grado de sustitución bajo.

Por lo tanto, según el esquema general de los criterios de imputación, deberán ser distribuidos en proporción a las rentas obtenidas por los residentes en las áreas comparadas. Principios alternativos de imputación como el de capitación, presentan un menor fundamento teórico.

2. Actividades sociales y comunitarias.

Comprende el gasto público destinado a la provisión de bienes y servicios considerados de carácter preferente por el Estado, *merit goods*. Se trata de servicios que, aunque pueden ser proporcionados por el mercado, la importancia de los efectos externos que generan obliga a considerarlos como bienes mixtos, con un importante componente de bien público puro.

Su componente de bien privado es atribuible a sus consumidores finales o intermedios específicos, a los que deben ser imputados directamente.

La existencia de importantes efectos externos es la razón argumentada para que el Estado trate de compensar la subproducción de tales bienes por el mercado mediante su provisión presupuestaria. Además, son bienes considerados de orden preferente, por lo que el Estado prima la consecución de determinados niveles de consumo de estos bienes considerados como deseables desde el punto de vista histórico y social. Con este fin, la mayor parte de estos servicios se proveen libres de cargas directas o a precios inferiores a su coste de producción.

Aparecen recogidos en dos funciones de primer orden o grupos de función: **3.Seguridad, Protección y Promoción Social** y **4.Producción de Bienes Públicos de Carácter Social**, las cuales a su vez se subdividen en ocho funciones.

La función **3.1. Seguridad y Protección Social**, la más importante en términos cuantitativos del presupuesto ya que supone más de la tercera parte de éste, agrupa todos los gastos reales y de transferencias que constituyen el régimen de previsión y seguridad social desempeñado por el conjunto del sector público.

Incluye, además de los gastos de carácter benéfico-asistencial, la totalidad de las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, las ayudas familiares, los gastos por desempleo, los relativos a las relaciones laborales, constituidos todos ellos por prestaciones económicas diversas recibidas en última instancia por personas físicas.

Por lo tanto, constituye una partida de fácil imputación de sus beneficios, ya que la mayor parte de ellas son transferencias monetarias corrientes, el **criterio de imputación** consistirá en proceder a su distribución entre sus perceptores directos para realizar la imputación geográfica de sus beneficios.

La función **3.2. Promoción Social** recoge todas las partidas destinadas de la formación educativa, becas y apoyo a diferentes actividades escolares, la promoción del empleo, formación profesional ocupacional, promoción de la mujer, juventud, etc.

El **criterio de imputación** será el mismo que en el caso anterior, imputación directa entre las personas físicas beneficiarios últimos de las transferencias monetarias directas en que se concretan esta serie de gastos.

La función **4.1. Sanidad** incluye todos los gastos que tienen por objeto prevenir y curar las enfermedades humanas los gastos de hospitales y otros centros asistenciales y todos los relacionados con la salud, junto con los de la administración general sanitaria.

La sanidad debe ser considerada como un bien mixto, con un componente público claro, debido a los importantes efectos externos positivos que genera para el conjunto de la sociedad. Precisamente esta característica, el hecho de que los beneficios de estas actividades alcanzan, no solamente a los directamente tratados, sino a la población en general, hace que el criterio de imputación sea relativamente más complejo. Aplicando la recomendación recogida en el estudio de **Dean** (1970), deberemos utilizar la estimación de la elasticidad del consumo de servicios

sanitarios con respecto al número de sus beneficiarios, ("*crowding- parameter*"), con el fin de determinar la cuantía de sus componentes público y privado.

Una vez determinados, el **criterio de imputación** consistirá en la imputación directa de sus beneficios privados a las personas a las que se destinan los servicios sanitarios correspondientes. El resto del coste total debe ser asignado a un consumo colectivo con un criterio de incidencia progresiva con respecto a la renta, como podría ser, por ejemplo, un criterio de capitación.

La función **4.2. Educación** clasifica todos los gastos relacionados con el funcionamiento, conservación y creación de centros de enseñanza, desglosados en los gastos de enseñanza y los de administración general.

Se trata, nuevamente de un gasto público con grandes efectos externos interjurisdiccionales positivos ("*fiscal-spillovers*"), ya que con frecuencia los desembolsos efectuados en una región, benefician también a residentes habituales en otras regiones.

Estos efectos externos deben ser interiorizados en la medida de lo posible, por ello el **criterio de imputación geográfica**, deberá ser el mismo que el aplicado en el caso de la sanidad. Teniendo en cuenta que se trata de un bien mixto, procederemos a la imputación de sus beneficios privados a los colectivos de personas que reciben estos servicios y el resto, aplicando un criterio de incidencia progresiva con respecto a la renta privada.

La función **4.3. Vivienda y Urbanismo** y la función **4.4. Bienestar Comunitario** incluye todas las dotaciones relativas a programas de financiación y subvención de la construcción de viviendas sociales, urbanismo y equipamiento social de los núcleos urbanos y rurales, arquitectura, saneamiento y abastecimiento de aguas, etc.

En estas funciones, predominan los gastos de capital sobre los corrientes, por ello todas las inversiones reales deben ser regionalizadas para proceder a su **imputación espacial**.

La función **4.5. Cultura** y la función **4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales** engloban todos los gastos relacionados con bibliotecas y archivos, museos, artes plásticas y escénicas, deportes y educación física, protección del patrimonio histórico y artístico y todo lo relacionado con la promoción cultural, la comunicación social y la participación ciudadana.

El **criterio de imputación** de los gastos públicos incluidos en estas funciones, teniendo en cuenta su naturaleza de servicios mixtos, coincidirá con el expuesto para los casos de la educación y la sanidad, imputación diferenciada de sus beneficios privados, a los consumidores específicos, y de sus beneficios públicos, a repartir de acuerdo con un criterio de incidencia progresiva con respecto a la renta privada.

Respecto a los gastos relacionados con la administración general de todas estas funciones, pueden ser asignados de forma regionalizada en proporción a los beneficios derivados del resto de partidas de gasto.

3. Actividades económicas.

Este grupo de función incluye todos los gastos que persiguen el desarrollo de la capacidad productiva de la economía, mediante la orientación de la actividad productiva hacia los sectores considerados más convenientes para la obtención de los objetivos económicos perseguidos por las opciones políticas, la incentivación de determinadas actividades productivas mediante la reconversión de los sectores productivos y, en general, todo impulso que contribuya al crecimiento de la economía.

Comprende tres funciones de primer grado o grupos de función : **5. Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico, 6. Regulación Económica de Carácter General y 7.Regulación Económica de Sectores Productivos**, que se subdividen a su vez en trece subfunciones.

Las funciones **5.1. Infraestructuras básicas transportes, 5.2. Comunicaciones y 5.3. Infraestructuras agrarias** recogen una serie de gastos, en su mayor parte de capital y, como tales, de carácter intermedio, relacionados con los recursos hidráulicos, transporte terrestre, puertos y aeropuertos, comunicaciones, mejora y desarrollo del medio rural, etc. Todas las partidas recogen las dotaciones de los gastos de capital, destinados a la adquisición y construcción de este tipo de bienes, los más importantes cuantitativamente, junto con dotaciones de gastos corrientes destinados a la administración, mantenimiento y conservación.

Los servicios proporcionados por este tipo de bienes son en su mayor parte de carácter intermedio, pero también tienen un componente claro de bienes finales. Esta característica debe ser tenida en cuenta a la hora de proponer un **criterio de imputación** para los beneficios de este tipo de bienes.

En el primer caso, deben ser imputados a los consumidores en general de estos servicios, para ello habitualmente se utilizan las participaciones regionales en el consumo nacional de los bienes privados complementarios de estos bienes públicos, aunque factores como la propiedad de bienes de capital privados relacionados con estos servicios públicos, nos permitirían una mayor desagregación en la imputación de sus beneficios aplicada sobre el total de gastos con cifras regionalizadas para los gastos de inversión y corrientes. El componente de consumo final debe ser imputado a los consumidores específicos de cada servicio. Las subvenciones deberán ser imputadas, lógicamente, a sus beneficiarios individuales.

Las funciones **5.4. Investigación Científica y 5.5. Información Básica y Estadística** recogen dotaciones destinadas a la investigación, tanto técnica como aplicada, y a la cartografía, la meteorología y la estadística.

El **criterio para su imputación** será el mismo que en el caso anterior, separando sus componentes intermedios y finales.

Las funciones **6.1. Regulación Económica, 6.2. Regulación Comercial y 6.3. Regulación financiera** comprenden una serie de gastos que conforman el entramado jurídico-económico en el que se desarrolla la actividad económica del país. Se incluyen aquí todos los gastos relacionados con la gestión del sistema tributario, el diseño y la aplicación de la política

económica presupuestaria y fiscal, la defensa de la competencia, la política de crédito oficial y la administración y regulación de los mercados financieros.

Todos estos bienes tienen un componente público puro elevado, por lo que son difícilmente asignables de forma directa. El **criterio de imputación** debe ser proporcional a las rentas generadas en el conjunto de la economía. Además, en la mayoría de casos y teniendo en cuenta su nulo o bajo grado de sustitución por bienes privados debería utilizarse un criterio pro-ricos, imputándolos de forma regresiva en relación a las rentas privadas.

Las funciones **7.1. Agricultura, Ganadería y Pesca, 7.2. Industria, 7.3. Energía, 7.4. Minería y 7.5. Turismo** recogen los gastos de la Administración Central del Estado relacionados con la administración general, ordenación y mejora de la producción, regulaciones de los mercados, actuaciones administrativas sobre los sectores productivos, creación, reconversión y participación en empresas.

Para la imputación espacial de esta serie de servicios, más fácilmente asignables que los anteriores, el **criterio de imputación** debe considerar que los beneficiarios directos más plausibles son los empresarios de ese sector productivo concreto, así como, también habría que imputar una parte de ese beneficio a los trabajadores por cuenta ajena de ese sector productivo. Deberemos operar siempre con cifras regionalizadas y con el grado de desagregación funcional que nos permitan los datos estadísticos y contables de que dispongamos en cada caso.

El criterio normalmente aplicado es la imputación de los beneficios mediante una variable *proxy* como puede ser el valor añadido neto generado por estos sectores productivos en las áreas geográficas consideradas. Para la determinación de estas variables deberá realizarse mediante un análisis casuístico de cada programa y de cada sector productivo.

4. Gastos no clasificados.

La última de las grandes agrupaciones de los nueve grupos de función en que se estructura la clasificación por programas de gasto público de los Presupuestos Generales del Estado incluye dos funciones de naturaleza indefinida, aunque muy distintas entre sí. El grupo de función **9. Transferencias a Otras Administraciones Públicas Nacionales y Supranacionales** recoge las transferencias financieras de carácter interjurisdiccional fruto de las relaciones económicas entre los diferentes niveles de gobierno. Si tenemos en cuenta el escaso grado de corresponsabilidad fiscal logrado en la articulación de estas relaciones, al menos por el momento, es fácil deducir el sentido en el que viajan estas transferencias.

El **criterio de imputación** es claro, las transferencias que no tengan un destino concreto deben ser atribuidas, aplicando un enfoque regional, a aquellas comunidades autónomas que las reciben, incluyendo las recibidas por las corporaciones locales y provinciales del área geográfica estudiada, sin perjuicio de intentar localizar y cuantificar la existencia de filtraciones geográficas de sus beneficios.

El grupo de función **0. Deuda Pública** comprende la parte del presupuesto destinada a financiar el saldo de deuda pública viva en poder de residentes y no residentes, emitida por el Estado con fines no específicos según un principio de no afectación. El importe de los pagos a no residentes por intereses deben ser omitidos de nuestro estudio.

Para la **imputación** de estos gastos, podemos adoptar el supuesto de que la deuda pública, dada su no afectación inicial, se ha empleado en realizar las actividades comprendidas en el resto de funciones del presupuesto, por lo que podríamos proceder a su imputación en función de los beneficios imputados por el resto de programas de gasto. Otro criterio, más insatisfactorio desde el punto de vista teórico sería imputarlos directamente a los perceptores directos de estos flujos anuales de rentas en forma de intereses.

RESUMEN Y PERSPECTIVAS

Los grandes volúmenes alcanzados, tanto en cifras absolutas como en relación al P.I.B., por la actuación del sector público sobre la economía general, junto con la presencia de déficits estructurales y crecientes en la mayoría de las economías occidentales, cuya financiación supone la absorción creciente de recursos públicos, lo que tiene como consecuencia la disminución del margen de maniobra de la actuación pública.

En este contexto, no parece aventurado pensar que vamos a asistir al cuestionamiento de la deseabilidad intrínseca de la articulación de un número creciente de políticas de gasto público. Desde una perspectiva económica, deben evaluarse los distintos programas de provisión de bienes y servicios públicos en función de su eficiencia relativa frente a otras alternativas como la concesión de servicios públicos, el concierto económico de servicios o, en el caso extremo, la no intervención.

Para ello, debe efectuarse un proceso de análisis y evaluación de los objetivos públicos y, en relación a ellos, de los instrumentos de intervención disponibles, con el fin de incrementar la eficiencia de las políticas de gasto y optimizar las consecuencias de la actuación pública sobre la actividad económica. Todo ello, sin olvidar los argumentos de equidad, para los cuales, trabajos como éste, que intenten evaluar la incidencia del gasto público, son de enorme utilidad para el diseño de la estructura y composición del presupuesto y del sistema futuro de relaciones económicas entre las Comunidades Autónomas y la Administración Central del Estado.

Esta **propuesta de imputación de los beneficios del gasto público del Estado**, aquí presentada, debe ser considerada como una primera aproximación, al análisis de los múltiples problemas que se nos plantean a medida que nos introducimos en la maraña de programas de gasto que sustentan la actuación del sector público sobre la economía.

BIBLIOGRAFÍA

- Berger, S. :** " Dividing product between intermediate and final uses : a coment ", *Income and Wealth*, 29/3, 1983.
- Bird, R. :** " Income distribution trough the fiscal system : the limits of knowledge ", *American Economic Review*, 70, 2, 1980.
- Brennan, G. :** " The attribution of public goods benefits ", *Public Finance*, 36/3, 1981.
- Catsambas, T. :** " Substituability, separability and the distributionals implications of public goods ", *Public Finance Quaterly*, 3, 1982.
- Costas, J. :** " La incidencia del gasto público ", *Hacienda Pública Española*, 107, 1987.
- Crane, S. :** " Una interpretación de la distribución del gasto público en los estudios de incidencia presupuestaria ", *Hacienda Pública Española*, 93, 1985.
- Dean, J. :** " Benefit incidence methodology for mixed goods ", *Public Finance Quaterly*, 1, 1980.
- Else, P. :** " Further thoughts on public goods, private goods and mixed goods ", *Scottish Journal of Political Economy*, vol.35/2, 1988.
- González Páramo, J. M. y Utrilla, A. :** " El gasto público : una panorámica ", *Hacienda Pública Española*, 120-121, 1992.
- Heikkila E. y Craig, S. :** " Nested fiscal impacts measures using the new theory of local public goods ", *Journal of Regional Science*, vol.31, 1991.
- Hewitt, D. :** " The benefit incidence of consumption of public goods ", *Public Finance Quaterly*, 15/2, 1987.
- Horz, H. y Reich, V. :** " Dividing govern product between intermediate and final uses ", *Income and Wealth*, 28, 3, 1972.
- Maital, S. :** " Measurement of net benefits from public goods : a new approach using survey data ", *Public Finance*, 34, 1, 1979.
- Medel B., Molina A. y Maldonado J. :** " La incidencia del gasto público : veinte años después", *Revista de Economía Pública*, Bilbao, 1991.
- Peacock, A. :** " El tratamiento del gasto público en los estudios sobre distribución de la renta ", *Hacienda Pública Española*, 107, 1987.
- Philpotts, G. :** " Public good benefit attribution ", *Public Finance Quaterly*, 14/3, 1986.
- Roig Alonso, M. :** *El Gasto del Estado Español y su incidencia Económica en el País Valenciano*. Instituto Valenciano de Estudios e Investigación, Valencia, 1987.

ESTRUCTURA FUNCIONAL

DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

GRUPOS DE FUNCIÓN

- 1. Servicios de carácter general.**
- 2. Defensa , protección civil y seguridad ciudadana.**
- 3. Seguridad , protección y promoción social.**
- 4. Producción de bienes públicos de carácter social.**
- 5. Producción de bienes públicos de carácter económico.**
- 6. Regulación económica de carácter general.**
- 7. Regulación económica de sectores productivos.**
- 9. Transferencias a otras Administraciones Públicas nacionales e internacionales.**
- 0. Deuda Pública.**

FUNCIONES

-
- 1.1. Alta Dirección del Estado y del Gobierno
 - 1.2. Administración general
 - 1.3. Relaciones Exteriores
 - 1.4. Justicia
 - 1.5. Protección y seguridad nuclear
 - 2.1. Defensa
 - 2.2. Seguridad y protección civil
 - 3.1. Seguridad y protección social
 - 3.2. Promoción social
 - 4.1. Sanidad
 - 4.2. Educación
 - 4.3. Vivienda y urbanismo
 - 4.4. Bienestar comunitario
 - 4.5. Cultura
 - 4.6. Otros servicios comunitarios y sociales
 - 5.1. Infraestructuras básicas y transporte
 - 5.2. Comunicaciones
 - 5.3. Infraestructuras agrarias
 - 5.4. Investigación científica, técnica y aplicada
 - 5.5. Información básica y estadística
 - 6.1. Regulación económica
 - 6.2. Regulación comercial
 - 6.3. Regulación financiera
 - 7.1. Agricultura , ganadería y pesca
 - 7.2. Industria
 - 7.3. Energía
 - 7.4. Minería
 - 7.5. Turismo
 - 9.1. Transferencias a las Administraciones Públicas Territoriales
 - 9.2. Transferencias a la Comunidad Europea
 - 0.1. Deuda Pública
-